

LAS RELACIONES SUREUROPEAS CON EL MAGREB

POR JUAN PANDO DESPIERTO

Tendencias de las relaciones sureuropeas hacia el Magreb

La naturaleza estratégica positivista

Desde la percepción sureuropea del Mediterráneo como dilema geopolítico diferenciado, y generador de una secuencia de inseguridades cíclicas, existe una asimetría evidente en el entendimiento de las necesidades de cooperación y desarrollo con este área, vital para la consolidación o no de un deseable equilibrio entre las dos orillas.

Históricamente, las estrategias de comprensión del marco mediterráneo se encontraban compensadas, y las dos vertientes, oriental y occidental, eran similares en su importancia no sólo para el interés de cancilleres y diplomáticos, sino también para la intelectualidad europea.

La quiebra de los viejos sistemas norteafricanos de gobierno y la progresiva desestabilización de las sociedades implicadas por esos cambios, ha invertido el foco de la preocupación sureuropea y comunitaria, que desde la década de los años ochenta se orienta hacia los espacios occidental y central, en detrimento del levante mediterráneo, y más concretamente del área turco libanesa, progresivamente aislada (en los conceptos y en las prácticas comerciales) de su necesario reconocimiento.

En oposición, Marruecos cuenta, en el ámbito de la CE y de la OTAN, con dos potencias tradicionalmente favorables a reforzar su estabilidad como

sistema político diferenciado, dada la gravedad de la progresiva crisis argelina desde el año 1989, y la configuración del Reino alauí como la tercera columna norteafricana, es decir, uno de los pilares básicos que sostienen el entablamiento de las fachadas ideoculturales y estratégicas del occidente islámico (las otras dos son la propia Argelia y Egipto). Esas fuerzas constantes que, desde Sureuropa, ejercen una suerte de mecenazgo estratégico sobre Marruecos y, en menor medida, sobre Argelia, son Francia y España.

No cabe duda que los procesos de segregación ideológica y social, en actividad creciente en el área magrebí, pueden producir radicales acciones de fragmentación regional, que podrían darse primero en Argelia y después en Marruecos, quedando Túnez a salvo, si es que no se produce una intervención libia.

Lo argelino y lo marroquí son dos sensibilidades permanentes en la conciencia estratégica de España y Francia. Las naciones que definen esos títulos —en menor medida la importancia de sus pueblos, aunque ese irrealismo se va demoliendo progresiva, pero lentamente—, fuerzan la naturaleza perceptiva de ambos Estados como una misma figura de interés geopolítico fundamental para el equilibrio del occidente mediterráneo.

Esta actitud positivista es única en la cuenca mediterránea, y ningún otro país o sistema de gobierno goza de similares tutorías estratégicas. Ni Turquía, con toda la notabilísima potenciación de su perfil estratégico tras la quiebra del sovietismo en el Cáucaso y Asia Central, ni Malta, islote de desarrollismo material y parlamentario en el centro del Mediterráneo, ni siquiera Egipto, como país eje de la cultura política del islamismo contemporáneo, disponen de semejantes protecciones argumentales.

Marruecos y Argelia, no acaban de aprovechar (valorar) la trascendencia de esa tutoría hispano-francesa, que debería servir para reactivar sus urgentes reformismos institucionales. Ambos países, los de mayor dinamismo intelectual y social en el Magreb, permanecen sometidos a una mutua inercialidad de colisiones geopolíticas recurrentes. Pese a ello, Rabat y Argel son las capitales morales de la esfera magrebí y, en consecuencia, pugnan por reconducir su rivalidad geohistórica desde la vía de una concordia interzonal que no termina de fructificar, pero que tampoco empeora. Estos dos factores, pese a sus divergencias, irradian importantes influencias no sólo en la especificidad magrebí, sino en relación al conjunto del África saheliana, espacialidad estratégica en la que Argel y Rabat ejercen, a su vez, una tutela indirecta.

El Magreb, en su historia reciente y en su prospectiva inmediata, se ha beneficiado y se beneficia del apoyo moral que España y Francia han pres-

tado a sus dos señales político nacionales más representativas: lo marroquí y lo argelino. De la valoración amistosa que, de la idea de Marruecos (como valor geoestratégico sintetizado en el sistema alauí), y de la idea de Argelia (como poder interzonal, defensor histórico de un progresismo islámico), han poseído y poseen Francia y España, se ha derivado la consolidación de una doble entidad política amortiguadora de las tensiones magrebíes y sahelianas, rentabilidad máxima del interés euroatlántico. Pero de ello también se ha inferido, como acto de justicia contributiva a la razón común entre ambas orillas, que la paz del Mediterráneo Occidental jamás será posible si los pueblos argelino y marroquí no acceden a una sincera práctica de las libertades, y que sólo desde esa configuración podrán España y Francia contar con una noble voluntad de colaboración por parte de Argelia y Marruecos como entidades históricas constantes.

Una parte sustancial de «lo español» y «lo francés» se apoya en la raíz creativa del sur mediterráneo, recinto histórico en el que se consolidan como cultura y estrategia. Esa cosmogonía hispano-africana, que posee una colateralidad de menor raigambre, pero de idéntica potencialidad en el valor franco-africano, es uno de los fundamentos morales de esta tutoría sur-europea.

De todo ello dimana una importante estabilidad conceptual del concepto de Argelia y Marruecos para la sensibilidad comunitaria, desde lo intelectual a lo comercial. Esa energía resulta ser altamente positivista en cuanto a las relaciones institucionales del Marruecos alauí con la europeidad en su conjunto, y se amplían desde el ámbito financiero al agroindustrial o parlamentario, poseyendo una relevancia inferior en el caso argelino, aunque se guíe por los mismos principios.

Pero esa fuerza se autolimita, y gravemente, en la proyección interior de esas comunicaciones euromagrebíes, que sólo sirven como excusa a respectivos inmovilismos; a un mantenimiento de la todavía medievalista estructura alauí, al no favorecer el desarrollo de una autonomía democrática del pueblo marroquí, y a una no resolución inteligente de la crisis institucional argelina, asfixiada todavía por las graves contradicciones posbudafismo.

Desde las evidencias de ese mecenazgo hispano-francés que comentamos, las relaciones estatales e interejércitos entre ambas orillas son cordiales e, incluso, sinceramente afectuosas, pero subyace en ellas una inquietud constante hacia un difícil futuro que es compartido: a la grave crisis socio-industrial y política de Europa, que coarta gravemente la prioritaria atención política hacia la orilla sur de el Mediterráneo, se solapan las inquietudes derivadas por el largo *impasse* institucional argelino, recluido en una situa-

ción de preguerra civil, y la crispada perspectiva de una sociedad como la marroquí, obligada a convivir entre severos desajustes estructurales, tanto en lo ideológico como en lo económico, y que siguen sin resolverse en un horizonte cada vez más crítico, dada la lógica de un agotamiento del modelo gubernamental en vigor, que compendia el personalismo del rey Hassan II.

No obstante, y pese a estas dificultades notorias, tanto España como Francia mantienen una posición de comprensión subjetiva no sólo hacia ambos regímenes norteafricanos, sino también hacia la urgente necesidad de un progresismo democrático en sus respectivas sociedades, mentalidad extensible igualmente a Túnez y Mauritania. Esa doble acción proyectista trata de asegurar un aperturismo diplomático sureuropeo y comunitario en la zona de difícil concreción, habida cuenta de la ambigüedad forzosa de esa política, propia de un materialismo estratégico evidente.

La tutoría hispano-francesa hacia el Magreb se acerca a una fase crítica, en la que se hará perceptible su único vicio: la insistencia en gestionar equivocadamente su indubitable ascendente positivista, que se traduce, en la práctica, en un mero proteccionismo de los regímenes magrebíes. Éstos, precisamente, malviven en su penosa realidad por su propia incapacidad para resolver las demandas populares o estratégicas a las que tienen que hacer frente, carencias institucionales e infidelidades nacionales que se ven reforzadas, indirectamente, por estimar que se posee un beneplácito infinito al respecto por parte de España, Francia y también Estados Unidos de América.

Realidad perniciosa de todo esto es la pasividad formal y práctica, fruto de esa histórica tolerancia estratégica sureuropea, que se ha mostrado frente a un sistema como el alauí, empeñado desde hace décadas en mantener una posición contraria al derecho internacional, al que ha conculcado obstinadamente, y del que es penoso ejemplo la situación existente en el Sáhara Occidental.

Como resumen, diríamos que las políticas exteriores de España y Francia, enfrentadas al hecho diferenciador marroquí y argelino, se han visto obligadas a separar «lo secundario» de «lo importante», y aunque esto ha forzado el silencio institucional sureuropeo en serias cuestiones de defensa del derecho elemental de los pueblos, o en los dictados explícitos de los organismos internacionales sobre solución de los conflictos regionales, se ha insistido en respetar el todo —la idea de la continuidad política de esos regímenes, y la estabilidad del conjunto magrebí—, más que en atender a la legitimidad de las solicitudes socio-políticas que se desarrollaban en la interioridad argelino-marroquí.

De ahí las sorpresas institucionales, tanto españolas como francesas, por la magnitud de las dramáticas permutas ocurridas en Argelia en el período 1990-1992, y la posibilidad, bien cierta, de que se repita ese «asombro» ante los giros políticos que puedan darse en el Marruecos alaui y en la Argelia del posbudiafismo en 1993-1995.

No obstante, no debe entenderse por lo anterior que la diplomacia española y francesa practiquen una dinámica de consentimiento hacia todo aquello contrario al derecho o al dinamismo progresista que pueda emanar de los regímenes magrebíes mencionados. Nada más lejos de la sinceridad interior de ambas naciones sureuropeas. Ni España ni Francia son partidarias de una política de hechos consumados, esto es, no defienden, *per se*, unas relaciones euromagrebíes «sin ojos ni oídos».

Ahora bien, ante el crítico realismo de un Magreb donde la deslegitimación institucional corre paralela a las ambiciones extremistas de las ideologías fundamentalistas, la directriz resultante para Sureuropa es la de una inmediata resolución ante la dramática estrechez de las opciones viables: apenas hay dudas entonces entre despotismos de Estado y terrorismos homicidas en la calle. No se defiende a los primeros, y se está claramente en contra de los fanatismos guerrillero-terroristas.

Sin embargo, aunque se piensa en su mañana político —que en el caso español casi podría decirse que es el nuestro, tal es nuestra emotividad histórica hacia esa proximidad geosocial y estratégica—, no se acierta a formalizar una defensa eficaz de las sociedades magrebíes afectadas por esta crisis crónica, y la falta de una decidida respuesta popular e institucional ante esas amenazas sume a Sureuropa en una grave perplejidad.

La presencia en superficie de esas corrientes desestabilizadoras en marcha dentro del Magreb evidencia una tensión en profundidad de muy superiores dimensiones a la petición, a veces desesperada, de un cambio de gobierno. Se exige una nueva legitimación institucional, que es difícil de encontrar, porque los viejos estadistas ni reaccionan ni son sinceros en sus reformismos expuestos reiteradamente, y los jóvenes líderes carecen de experiencia en el uso y control de la paciencia popular.

Si se consolidase la paz israelo-palestina, en principio sellada el 23 de septiembre de 1993 —fecha en la que el *Knesset* (Parlamento) judío en Jerusalén aprobó la resolución presentada a tal fin por el Gobierno Rabin—, el influjo de este realismo, en principio impulsor de un maximalismo positivista para todo el mundo islámico —que luego conocerá severas relativizaciones—, podría incentivar las demandas del progresismo democrático argelino-marroquí, pero

siempre caben perversas alianzas de las fuerzas gubernamentales subsistentes en estos sistemas con otras ideologías, incluso las integristas, para así dar al traste con esa necesaria efectividad de las virtudes democráticas del moderno panislamismo.

En el horizonte de los próximos 12-18 meses, la responsabilidad del mecenazgo de España y Francia hacia el Magreb aumentará considerablemente. Será preciso superar la metodología en curso, tendente a la preservación de Argelia, Marruecos y Túnez como regímenes no perturbadores de la tranquilidad europea y comunitaria, y perseguir no sólo la defensa de sus naturalezas geopolíticas e históricas, sino el leal entendimiento con sus pueblos, filosofía de la que depende la consecución de un largo período de paz mediterránea.

El copadrinazgo hispano-francés hacia el Magreb

España y Francia actúan como preceptores estratégicos de un Magreb empeñado en un difícil aprendizaje de la norma democrática y en la dinamización de sus necesidades de progreso social.

Esa acción tutora se amplía ahora rápidamente hacia Argelia, pero sigue siendo asimétrica también, pues la coincidencia de intereses hacia Marruecos por parte del eje París-Madrid no se da, en la misma intensidad, que en el que se orienta hacia Argelia, en el cual prima la iniciativa francesa.

Esta disimetría puede agravar las dificultades del proceso de estabilización en Argelia, sometida a un acoso constante por parte del radicalismo islámico, y que precisa de una nueva potencia protectora directa, en este caso, España, que debería combinar estrechamente con Francia sus esfuerzos de cooperación hacia Argelia en todos los niveles.

No obstante, y en lo que concierne al bienio 1992-1993, la diplomacia española ha invertido su posicionamiento hacia el problema magrebí, excesiva y notoriamente dirigido hacia Marruecos como tradicional sugestión estratégica, y reacomoda ahora sus objetivos en pro de una mayor dinamización de la seguridad de Argelia, al entender que ésta forma parte sustancial de sus intereses geoestratégicos generales. Pero esta actitud es reciente, no está bien definida conceptualmente, y resulta claramente insuficiente para la dimensión evolutiva de la crisis existente en Argelia y el estado soterrado de conflicto que vive Marruecos, que no es únicamente social, sino institucional.

De esta forma permanecen oscurecidas la potenciación de las reformas sociales y políticas del pueblo marroquí que, pese a ser incumbencia de su

sistema de gobierno, deberían recibir los avisos pertinentes de reforma por parte de una Europa interesada en su supervivencia, y sin los cuales ni habría credibilidad de Marruecos hacia sus aliados en Europa, ni se dotaría de futuro coherente al régimen que gobierna el país. Ejemplo de ello es lo sucedido con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones legislativas (17 de septiembre del año 1993), en las que los partidos oficialistas, derrotados en los comicios celebrados el 25 de junio —pese a haberse producido entonces descaradas violaciones de la honestidad electoral por parte de candidatos gubernamentales—, pudieron recuperarse de aquel descalabro, al sumar 90 de los 111 escaños en liza —elegidos a través de un enrevesado maquinismo corporativista—, demostración contundente de la efectividad del método de sufragio indirecto, que protege la supervivencia del sistema alauí (1).

En cuanto a la situación de Argelia, sometida a una presión desestabilizadora como pocos Estados han podido soportar en las últimas décadas —el atentado que acabó, el 23 de agosto del año 1993, con la vida de Kasdi Merbah, antiguo primer ministro, y hombre inductor de una convivencia sincera entre el integrismo y las fuerzas institucionales, desde su propia autorregeneración intelectual, es la prueba evidente—, la gravedad de esa realidad impone una posición diplomática mucho más comprometida por parte de los países sureuropeos y de la propia CE.

La dimensión y hondura del deterioro que padece Argelia sólo son comparables al cerco que padeció el régimen del sha Reza Pahlevi en el Irán de 1975-1979, o a la crisis que rodea asfixiantemente al régimen surafricano del presidente De Klerk desde el año 1991, escenario del que parecía emerger Suráfrica a finales de septiembre del año 1993, coincidente con las primeras acciones para el levantamiento del embargo impuesto por Naciones Unidas. Argelia, en cambio, sobrevive penosamente sometida a un peculiar embargo popular y estratégico: ni el pueblo argelino tiene confianza en sus instituciones, ni éstas gozan de la credibilidad necesaria por parte de Occidente. El cambio en la dirección política ocurrido el mismo día del asesinato de Merbah, en el que Rheda Malek tomaba las riendas de Gobierno, trataba de actuar en esa doble dirección: recuperar legitimidades interiores y proyectar hacia el exterior una imagen de modernismo, que el primer ministro cesado, Belaid Abdessalam, proveniente de las canteras ideológicas del bumedianismo, era incapaz de transmitir.

En el marco de las posiciones del occidente europeo hacia el sur mediterráneo, resulta imprescindible activar el ensamblaje de las políticas tutoras de

(1) *El País*, 19 y 20 de septiembre, 1993.

España y Francia hacia una Magreb sometido a un proceso de demolición de sus instituciones. Esa coordinación existe, pero padece no sólo las carencias económicas subsiguientes al conflicto de estructuras que afecta hoy en día a los principales países desarrollados, sino que todavía no cuenta con un *corpus* doctrinal conveniente, ni tampoco con un reparto de funciones eficaz entre los diversos Ministerios y órganos de Gobierno hispano-franceses.

Habrà que precisar, y no atrevida, sino objetivamente, que la guerra ideológica, de carencias materiales y profundas quiebras sociales que padece el Magreb, nos pertenece por la propia dimensión de su riesgo, y que si no atendemos, en consecuencia, la magnitud de esas ofensivas (que han superado el concepto de «amenazas»), seremos afectados por ellas muy severamente, y sin posibilidad entonces de excusarnos ante una nueva «sorpresa de la historia». Una advertencia que compete expresamente a España más que a ningún otro país sureuropeo.

El copadrinazgo hispano-francés hacia el Magreb no es un mero recuerdo de anacrónicas funciones colonialistas. Reformado por la misma evolución de la historia, y dinamizado por los riesgos de un desplome del entramado institucional norteafricano, su funcionalidad no sólo se mantiene, sino que aumenta. En la reunión comunitaria de Copenhague (21-22 de junio del año 1993), los Doce urgieron a sus ministros competentes en el asunto para que incentivasen la negociación del mandato entre la CE y Marruecos, mientras que la petición de ingreso conceptual de Malta recibía un descortés aplazamiento, y de nada sirvieron las posteriores protestas de la presidencia del Parlamento Europeo.

El acuerdo entre la Comisión Europea y Rabat, con ser una necesidad estratégica, puede que haya padecido un exceso moral de tutela por parte del automatismo protector hispano-francés hacia el Magreb. Francia y, sobre todo, España, no deberían olvidar que los compromisos fijados para la entrada, el 1 de enero de 1994, de los antiguos países miembros de la EFTA —Austria, Finlandia, Noruega y Suecia—, van a trastocar, radicalmente, el ya de por sí precario equilibrio entre un Norte comunitario de mucha mayor pujanza tecnoindustrial y política que lidera Alemania, y un Sur comunitario en franca recesión de su trascendencia intercomunitaria e, incluso, ideológica, con una Francia disminuida estratégicamente, y unos sistemas políticos como los de España e Italia, sometidos a hondas perturbaciones socio-institucionales.

Desde estas premisas, alentar los pactos comerciales con Marruecos sin incentivar paralelamente el ingreso de Malta, pequeña nación modélica en el

ámbito mediterráneo, es grave olvido de perspicacia política. Una Malta comunitaria, por su condición de eficacia democrática y su validez comunitativa entre las dos márgenes mediterráneas, es condición *sine qua non* para aliviar las inevitables rupturas venideras.

Mientras, crece, y muy peligrosamente, la incertidumbre unionista en Europa. Ésta es una crisis que incide directamente en el autocontrol sureuropeo sobre lo que pueda ocurrir en el Magreb. Las amenazas de una división práctica de la CE en dos mitades antagónicas, por sus intereses y preocupaciones geopolíticas absolutamente opuestas, con un bloque progermánico —por convicción o necesidad forzosa— y otro latino, pero falto del apoyo decidido del Reino Unido, y con una Italia que volverá a repetir sus vaivenes estratégicos que le son característicos —como sucedió en el escenario histórico de 1914-1915—, pueden hacer mucho daño no sólo al buen razonamiento del problema mediterráneo, sino a la propia categoría estratégica de Europa.

Como esas divergencias van a aumentar de modo inexcusable por el hecho evidente de una pérdida de la gestión centralizada del ser comunitario —dado el volumen de la ampliación concebida hacia el Este y el deterioro, casi terminal, del ideario de Maastricht—, se perfila una lesiva hipoteca geoestratégica para Sureuropa y el Magreb, en la que los perjuicios serán casi homogéneos para ambas zonas. Una misma y desastrosa familiaridad histórica. Sería lamentable que la primera ocasión en la que se produjese una alianza euromagrebí fuese ésta efectiva, únicamente, en la constatación de unas pérdidas estratégicas, materiales y morales comunes.

El copadrinazgo hispano-francés hacia el Magreb, y especialmente en dirección a Marruecos y Argelia, es algo excepcional en las relaciones internacionales. Pero hay que añadir inmediatamente al respecto que esa potencia ni es aprovechada inteligentemente por los mismos gestores de esa trayectoria histórica, ni entendida con el obligado dinamismo y lealtad por los sistemas beneficiados de la misma.

Si España y Francia disponen todavía hoy de una influencia decisiva en «la explicación» de los problemas mediterráneos, ese poder argumental conocerá una relativización acelerada, y puede convertirse en unos años más en algo sólo testimonial. La progresiva elephantiasis del neogermanismo político, acrecentada por la crisis sempiterna de Rusia y de todos los antiguos miembros del *hinterland* ex soviético, hoy englobados en el grupo de Países de Europa Central y Oriental (PECO), somete a toda la arquitectura comunitaria a un trasvase de presupuestos y funciones tan impresionante como impredecible en sus consecuencias.

Puede ser que el copadrinazgo hispano-francés hacia el Magreb conozca sus últimas horas de realismo. Y si esto sucede así, será tanto una tragedia para el mundo magrebí como un desgraciado oscurecimiento del rango geoestratégico de España y Francia en la dirección de los asuntos internacionales.

Estructura esencial de las reformas conceptuales que el Magreb espera de Europa

El marco político y la perspectiva moral

El Magreb, como idea de estabilidad socio-política hacia Europa, dependerá, claro está, de su capacidad de reforma interior y, así mismo, en la definición de una nueva voluntad cooperante entre sus países miembros que supere el manido concepto de «la gran unidad», de la que la realidad de la UMA es patética negación.

Ahora bien, ese Magreb, que debe ser progresista o, sencillamente, nada será, excepto una región proclive a la formulación de medievalismos ideológicos y totalitarios, sigue dependiendo de Europa para superar la frontera de ese acusado regresionismo que padecen hoy las sociedades islámicas.

Pero la gravedad de la crisis económica europea, que es también mundial, incapacita la recepción (mental y material) de los fondos de ayuda necesarios para contener la degradación social y política de los mundos intramagrebíes.

Podríamos decir que, sin la solvencia de Europa, esto es, sin la confirmación de su unidad financiera y política, la correspondencia unitaria, en lo económico y lo político, para su reflejo norteafricano occidental no pasará de ser una entelequia a medio plazo. Y se corre el riesgo de que lo sea para siempre.

El Magreb únicamente logrará ser una realidad estable y de talante positivista si Europa se le adelanta no menos positivamente en ese camino. Y si no es así, ninguna de las dos partes gozará de estabilidad ni podrá ejercer sus funciones como polos de equilibrio respectivos en sus correspondientes escenarios de influencia.

Con un decrecimiento económico del 0,5 %, previsto para el conjunto de las actividades comunitarias en el año 1993, y una hipotética reactivación a alcanzar en la segunda mitad del año 1994 o principios de 1995, a lo que se suman los cálculos preocupantes de índices de desempleo superiores al 12-13 % para el conjunto de la CE —del 23-24 % en el caso de España—,

mal puede sobrevivir Europa, y mal puede esperar subsistir el mismo Magreb, interrelacionado con el gran bloque comunitario en niveles comerciales todavía ubicados en torno al 61-62 %. Empero, nosotros también dependemos de un Magreb que se mantenga como activo comprador. El caso de Francia, que ha exportado en 1992 hacia esta zona hasta un total de 32.100 millones de francos (706.200 millones de pesetas), es decir, más que en todo el conjunto de las exportaciones realizadas sobre Europa Oriental, Latinoamérica y el Japón, es elocuentemente significativo (2).

Europa y África, en sus peculiares realidades geopolíticas, se resentirían muy gravemente de esas fallas que puedan producirse en sus avanzadas meridionales y septentrionales respectivas. La conjuntiva euroafricana, permanente utopía de la intelectualidad progresista de ambos continentes, corre hoy hacia su más radical desplazamiento de lo posible.

Por añadidura, los países magrebíes perciben no sólo su crónica indefensión económica, sino su soledad moral en relación a Europa. Sus regímenes no son «populares», ni en la escena parlamentaria ni en la sensibilidad social de los europeos, aunque sí lo sean en la mentalidad estratégica de los sistemas de defensa internacionales, donde se les admite sólo como mal menor.

Esta orfandad conceptual, que es también una descategorización de su nivel interpolítico, afecta seriamente a las sociedades magrebíes, y muy especialmente a los núcleos de reforma que subsisten en sus células intelectuales. La acción negativa se prolonga en el terreno de las concepciones ideomateriales de modelo occidental (grupos de empresarios, sindicatos, asociaciones feministas). Su batalla contra el regresionismo del poder y el fanatismo popular, sendas acciones demostrativas de incultura, de soberbia, es un esfuerzo titánico, honroso y admirable que merece toda la ayuda concebible.

Urge, pues, redefinir (actualizar) un apoyo moral que pueda ser materializado hacia esas naciones, con independencia de cuáles sean sus modos de gobierno. Todos, gobernantes indeseables o sólo tolerables para el pragmatismo sureuropeo, y esa masa ingente —65 millones entre tunecinos, mauritanos, argelinos y marroquíes, pues los 4,70 millones de libios permanecen bajo ese segundo embargo político-moral al que les somete el coronel Gaddafi— de gobernados por el fatalismo de una moderna historia política descorazonadora, necesitan comprobar que «no están solos», esto es, limitados exclusivamente a una cíclica petición de auxilios intergubernamentales euro-magrebíes para mitigar una depauperación colectiva, material y espiritual, que no remite.

(2) *Le Monde Economie*, 7 de septiembre, 1993.

Otro terreno donde se libra una durísima batalla es en el de la información. Argelia es una grave demostración al respecto. Las amenazas de muerte y las ejecuciones confirmadas por la violencia integrista —como la del escritor Tahar Yaut (junio de 1993)— se suceden sobre aquellos periodistas que no sólo trabajan en empresas periodísticas francófonas, sino que han hecho de esa peculiaridad una actitud combatiente (3). Esa prensa progresista argelina, que se ha visto atacada desde dos frentes —el institucional y el fundamentalista—, en realidad no se limitaba a protestar contra maneras dictatoriales, sino que ejercía el legítimo derecho del pueblo argelino para escoger una opción cultural y política. La diplomacia francesa actúa muy prudentemente al respecto, en buena medida rehén de su necesidad estratégica de no empeorar la difícil situación del sistema político que preside Kafi.

España, que ha perdido prácticamente todos sus puntales informativos en Marruecos, pero no sus valores simbolistas, que subyacen gracias a la penetración televisiva y radiofónica de sus emisiones en el Rif y País Yebala, no tiene los mismos problemas. Sin duda esto es así no tanto porque no haya podido mantenerse audazmente sobre el terreno informativo marroquí, como por la rígida sistemática de asfixia empresarial y política llevada a cabo por el alauísmo, que ha liquidado esa prueba de buena fe entre Marruecos y España.

Toda cabecera periodística —incluso editorial— que se atreviera a expresarse en español, modelo diferenciador de un modo de ser, en lo político y en lo moral, que todavía subyuga a gran parte de la ciudadanía marroquí, sigue siendo considerada un elemento de peligro para la estabilidad del sistema.

Es de esperar que tanto Marruecos como Argelia, en la perspectiva de su inercialidad institucional, comprendan finalmente que uno de los puntales de su supervivencia reside, precisamente, en la defensa de una pluralidad cultural, basamento de una concordia euro-africana.

Ahora bien, ¿cómo mantener esa exigencia, si las sociedades sureuropeas continúan su deslizamiento hacia modales xenófobos y racistas? Tendremos que recuperar la equidad moral en este aspecto decisivo, si es que de verdad nos interesa la seguridad estratégica, moralidad que concierne a nuestro futuro como seres capacitados no sólo para ejercer y proteger tareas de civilización, sino para efectuar demostraciones prácticas de esa intención en nuestro propio interior.

(3) SIMÓN, CATHERINE, «La presse algérienne entre deux cultures», *Le Monde*, 11 de agosto, 1993.

Superación del concepto de «enemigo»

La reiterativa definición del Magreb como «área hostil», que para algunos europeos es sólo una potencialidad, y para otros una inevitabilidad, lesiona profundamente no sólo las opciones de acercamiento hacia la idea de Europa por parte del reformismo interno magrebí, sino que incapacita la voluntad de auxilio de los europeos prudentes hacia esos reformadores norteafricanos siempre en apuros, ya sea el socialismo argelino berebizado de Ait Ahmed, o el sindicalismo marroquí progresista de Noubir Amaoui, secretario general de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), y condenado el 17 de abril del año 1992 a dos años de prisión por sus declaraciones democratizadoras a un diario madrileño.

Dada la insistencia en esa autodefinición imprudente del magrebí como «enemigo», los europeos se desatienden de una región amenazante, a la que estiman no vale la pena entregar ninguna ayuda. Por su parte, los magrebíes progresistas consideran como «esclavista» a una europeidad indiferente y prepotente, que les abandona brutalmente una vez que sus fábricas o economías no precisan ya del aporte sacrificial de los brazos del Sur. Sin duda alguna, queda mucho más aproximado a la verdad la formación del segundo estereotipo que la del primero, simplemente con que nos atuvieramos al cómputo de los rechazos, individuales o colectivos, que se producen sin tregua en Europa hacia el hombre norteafricano. Es ésta una abrumadora estadística de la ruptura intermediterránea que no prescribe.

En la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro a iniciativa de las Naciones Unidas (junio del año 1992), se había tratado de concitar en el ánimo mundial, la prioridad de obtener una concordancia entre progreso y naturaleza, dinámica siempre en precario en nuestra cotidianidad. Ese mismo mes de junio se había convocado en Viena una conferencia sobre los derechos del hombre, otra precariedad en evidencia, y característica de nuestra tumultuosa contemporaneidad. Uno de los proyectos más ambiciosos —y el de mayor trascendencia moral— era el de auspiciar en la capital austriaca la creación de un Alto Comisario de Naciones Unidas que velaría por el cumplimiento de los derechos humanos. Sólo 80 de las 200 delegaciones presentes, representantes de otras tantas nacionalidades o Estados, se pronunciaron favorablemente a esa propuesta (4).

Esto demuestra que subyace, en el discurso del hombre nacional y político, una profunda suspicacia hacia su propio autocontrol como tal hombre. De

(4) MATAROLLO, RODOLFO, «Pour en finir avec la barbarie», en *Le Monde Diplomatique*, número 473, agosto, 1993.

ahí a la aplicación de una retórica de la falsa libertad, no hay más que un corto trecho. Permanecen, en pie, todos los supuestos —y todas las directrices conductuales— que favorecen el recurso a actitudes belicistas.

Los europeos tienden a creer que su seguridad residen en rearmarse (conceptual y materialmente) frente a un área a la que tendrán, forzosamente, que «hacer la guerra», a la par que los magrebíes se deslizan hacia el falso proteccionismo de la dignidad que dice ofrecer el radicalismo islámico, un rearme de las conductas que también pasa por la materialización de las amenazas militares a largo plazo. Estos dos sin-sentidos son propensos a confluír.

Resulta evidente, pues, la urgente necesidad de invertir este devocionario de las mutuas descalificaciones, que sólo puede originar una certificación futura de las agresiones.

Se impone la lógica de ir, paulatinamente, desde un desarrollo equilibrado de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo (CSCM) hasta lograr una Alianza Intercontinental Mediterránea (AIM), en la que tendrían cabida los países de Europa, África y Asia que desembocan en su cuenca, para así lograr una nivelación de sus tensiones y un equilibrio funcional en sus mutuos objetivos de cooperación y desarrollo. Si israelíes y palestinos han logrado, al menos provisionalmente, reconducir sus tipificaciones históricas respectivas como enemigos naturales, igual tendríamos que hacer los sureuropeos, y esa labor concierne, prioritariamente, a españoles y franceses.

Ciertamente, es una utopía, pero hay que recortar su ambición inicial y sustituirla por una política de pequeños pasos —el ensamblaje euromagrebí por un lado, la conjunción euro-egipcia por otro, acciones a las que se añadiría un consenso rumano-turco-libanés en Oriente—, para que así puedan ser factibles otros escenarios más probables y racionalistas, los cuales permitan la conjugación final de ese ideal, siempre pospuesto y siempre necesario, de la CSCM.

Elevación de la trascendencia de la Política Mediterránea Renovada (PMR)

En la actualidad, y como respuesta continuada hacia una vieja inquietud, manifestada desde los incidentes del año 1988 en Argelia y la derrota electoral del FLN en las elecciones municipales y legislativas de 1990 y 1991, se vive desde la perspectiva europea una conciencia nítida de impotencia o de pérdida del control relativo sobre los procesos de cambio institucionales magrebíes. Lo cual es totalmente cierto.

Europa se debate en la disyuntiva de ser más intervencionista políticamente (apoyos más decididos hacia esos regímenes en crisis), o demostrar esa vieja amistad histórica, nunca fehacientemente explicitada hacia el área, por medio de planes de activación económica que sostengan el edificio social de esos países en conflicto.

Se tiene la sensación de que ambas acciones pueden llegar tarde. Y es ésta una convicción que va en aumento, y ajustada también a la más descarnada realidad. Paradójicamente, a ese desasosiego no se le contrarresta con una reacción política correlativa a la importancia de esos desafíos.

Se reconoce como claramente insuficiente la actitud o base de argumentos que expone la PMR, los cuales «flotan» en la ineficacia la más de las veces, puesto que su concepción política del problema es débil o está desorientada de todo realismo práctico.

Crece, en consecuencia, el convencimiento de que no se está a la altura que demandan los grandes retos estratégicos en curso, y es así cuando se hace irremediable el posicionamiento de África del Norte como un espacio «objetivamente hostil» o, cuando menos, como una zona cuyas convulsiones cíclicas y en progresivo aumento terminarán por hacerla ingobernable.

La Europa de la CE y de la OTAN estima como imprescindible el refuerzo económico y político de esos gobiernos norteafricanos bajo amenaza permanente. Pero la dimensión de ese esfuerzo (que es mental más que material) de auxilio europeo se ve drásticamente disminuido por la comprobación desmoralizadora del uso y gestión de esas ayudas europeas.

El caso es especialmente grave en Argelia, en menor medida en Marruecos, y algo más positivo en Túnez, pero en todas las situaciones euromagrebíes sigue sin optimizarse ese flujo auxiliador que llega desde una panorámica occidental siempre vigilante de esas corrupciones norteafricanas, pero que, en la práctica, nada puede hacer ante ellas.

Por tanto, la primera cuestión que se plantea es la exigencia firme, por parte de Europa, de una congestión de sus propias ayudas sobre el terreno distributivo de las mismas.

Esto puede parecer que lesiona la capacidad de soberanía de los países receptores de esas ayudas, pero sin esa prueba de buena voluntad magrebí resultará virtualmente imposible que Europa refuerce sus circuitos de protección política hacia los oficialismos norteafricanos.

Y del mismo modo, también será extremadamente dificultoso desde Europa convencer a empresarios o entidades de inversión para que profundicen en

el establecimiento de lazos más fuertes y dinámicos en la complicada —y a menudo desesperante— espacialidad social y administrativa del Magreb. Si se está plenamente de acuerdo en que la solución no sólo al problema de la inmigración, sino al descoyuntamiento institucional del Magreb, pasa por la instalación en esos territorios de estructuras agroindustriales potentes y bien gestionadas, se deberá convenir, igualmente, que esa acción, que puede sintetizarse en la divisa, el trabajo del Sur para el Sur (que es la paz del Norte), obliga a una correspondencia recíproca en el control y distribución de esos fondos.

Sin esa lealtad y honestidad paralelas, no es posible, en modo alguno, creer en una pacificación de las tensiones racistas y las suspicacias estatales subsistentes entre la doble espacialidad del Mediterráneo.

La PMR debe imponer firmemente esas garantías, sin cuya efectividad ni existirá la PMR, ni gozará de supervivencia esa moral de ayuda de Europa hacia el Sur, ni las sociedades de Europa verán garantizadas un largo período de reposo intelectual frente a la inseguridad de una orilla mediterránea, tradicionalmente tipificada como amenazante. El concepto de Europa como «ciudadela», en la que un clasismo tecnoestratégico pretende imponerse, va en contra de la norma que debe conducir el sentido común de las relaciones con el sur mediterráneo (5).

Sólo a través de una aplicación de las inteligencias de Europa (el derecho, la norma democrática, el bienestar social), lograremos no sólo conservar la paz en el Mediterráneo, sino hacer de esa ambición una prueba de honrosa sabiduría demostrable.

Tratamiento específico de los problemas de la emigración y nueva modulación socio-jurídica del caso

El establecimiento de los cupos de inmigración era una realidad urgente, impuesta por la lógica del control de una situación social altamente explosiva en los países receptores de esa masa de mano de obra extranjera, y que finalmente se ha definido acertadamente, como ha sucedido en el ejemplo de España.

No podía esperarse, por más tiempo, el atender una realidad humana y política que agravaba las tensiones internacionales e incidía muy negativamente en el tejido social europeo, agredido por una crisis económica sólo comparable a la de los años 1930-1932, fechas de la confirmación en el

(5) CHESNEAUX, JUAN, «Fracture en Méditerranée», en *Le Monde Diplomatique*, número 474, septiembre, 1993.

Viejo Continente de las convulsiones financieras estadounidenses. La dificultad por encontrar un puesto de trabajo ha vuelto a reafirmar, tristemente, las inercias xenófobas de una europeidad no madura, ciertamente.

Ante esta situación, donde se favorecía el estallido secuencial de brutalidades grupales —desde Alemania, país que ostenta el amargo protagonismo de esa barbarie, hasta la misma España, aunque en una realidad mucho menos salvaje—, se hacía urgente la constitución de una estructura político-administrativa que regulase la oleada migratoria, y que tratara de aislar sus influencias negativas.

En este sentido, la dimensión numérica de esos cupos de inmigrantes, diseñados en marzo del año 1993, y en un principio cifrados en torno a las 20.000 autorizaciones para un conjunto de solicitantes concentrados primordialmente en los espacios sociales dominicano, magrebí (marroquí) y filipino, parecen ajustados a las previsiones de contratos generados en los ámbitos propicios a acoger estos colectivos, sin casi ninguna preparación profesional: agricultura, servicios y turismo, siendo prácticamente inexistente la posibilidad de colocación en el terreno industrial o el científico.

Empero, estos cupos comenzaron a verse abocados —en el verano del año 1993— a drásticas reducciones en función del agravamiento de la crisis económica que afectaba a España y al conjunto de la CE, aunque podía estimarse que tal vez no descendieran más allá de los 8.000 permisos de trabajo, pues ésta sería la barrera política que, de ser vulnerada, se consideraba abriría de nuevo las fricciones euromagrebíes o hispano-marroquíes en concreto.

Aunque pendiente de definir en estas fechas (septiembre del año 1993) el marco operativo de los cupos de inmigración, la estrategia conceptual del sistema reside en el establecimiento de un doble pacto: el país receptor proporciona contrato laboral limitado a un plazo fijo (tres o seis meses, ampliables), y asistencia social garantizada. En justa reciprocidad, el solicitante se compromete a regresar a su país de origen una vez concluido ese contrato.

Desde estas premisas, consideramos que lo acertado sería establecer contingentes anuales de inmigrantes que accediesen a contratos temporales de trabajo, por períodos anuales, vigilando el Estado receptor de este colectivo su retorno imperativamente obligado al país de origen. Y en base a estos precedentes podrían aplicarse las siguientes tres definiciones socio-jurídicas:

- Todo aquel inmigrante que vulnerase esa obligación de regreso se vería desprovisto de toda posibilidad de acceder, en el próximo ejercicio anual, a un nuevo contrato laboral.

- Todo aquel inmigrante que hubiera cumplido diez estancias anuales de trabajo, y no hubiese tenido ninguna falta grave de incumplimiento del mismo, ni estuviese implicado en actos contrarios a la Ley del Estado receptor, podría acogerse a la solicitud de la nacionalidad española, que le sería concedida automáticamente.
- A todo aquel inmigrante que demuestre, por su buena fe y responsabilidad, hacerse merecedor a un puesto de trabajo, así mismo le corresponde el acceder a la plenitud de los derechos de ciudadanía del país en el que trabaja, al haber sabido demostrar que cooperó lealmente en el desarrollo y bienestar del país que le acogió en su desamparo inicial.

La Carta de los Derechos del Inmigrante, hasta ahora una mera promesa más que un compromiso firme, debe ampliar en estos aspectos su planteamiento argumental, e igualmente deberían pronunciarse al respecto las instituciones parlamentarias españolas. Pero es evidente que sólo así, desde la aplicación de una nueva filosofía del dar y compartir, puede asentarse la paz histórica entre las dos márgenes mediterráneas.

Líneas de tensión y de cooperación en el eje Europa-norte de África. Proyectos y especificidades

La ineludible ampliación de los cauces de ayuda europeos hacia la totalidad de la fachada norteafricana.

Equiparación de los riesgos y las defensas en la línea Rabat-Argel-Túnez-El Cairo

Pese a que la lógica del contacto magrebí defina casi obsesivamente las necesidades de atención de España y Sureuropa hacia ese área, no resulta menos evidente que la gravedad de los acosos ideológicos, y de las tensiones materiales derivadas de los mismos dependen, progresivamente, de la evolución de otro gran bloque geopolítico colindante al espacio anteriormente señalado. Esa proximidad negativa, que se especifica en la magnitud de la crisis socio-política existente en los países del Nilo, exige la contemplación de todo el fenómeno desde una óptica global.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre la Argelia de Kafi-Abdessalam con el Irán posjomeinista del presidente Rafsandjani (marzo del año 1993), fue sólo un anticipo de la situación de quiebra diplomática existente con Sudán, donde el presidente Omar Hassan el-Bechir parece dispuesto a levantar y sostener una «Internacional Islamista», como acertadamente definió Paul Balta al respecto.

La decisión del Gobierno del presidente Clinton, adoptada el 17 de agosto de 1993, de incluir a Sudán en la reducida pero inquietante lista de países que «sostienen al terrorismo» —junto a Corea del Norte o Irán—, expone la hondura de las amenazas que pesan no sólo sobre el área del Nilo, sino con relación a la precaria situación internacional de la paz: la conjura integrista para asesinar al secretario general de Naciones Unidas, Butros Ghali, y al presidente Hosni Mubarak, desarticulada en Estados Unidos a finales de junio del año 1993. Todo ello obliga a entender la cuestión de la seguridad mediterránea no como diversos compartimentos estancos entre sí, sino como vasos comunicantes de un mismo conjunto en conflicto.

De ahí la necesidad de asimilar (ampliar) el concepto de ayuda europea y occidental hacia un país seriamente afectado por estas conspiraciones internacionales: Egipto, que comparte esa preocupante titularidad amenazante con Argelia. La nación cabeza de la intelectualidad islámica se encuentra sometida a un proceso de desintegración institucional y comercial extremadamente severo. La hondura y extensión del fenómeno terrorista islámico, tras un crecimiento espectacular en la primera mitad de 1993 y una relativa contención del mismo en los meses siguientes, se reactiva de nuevo y forma parte de una energía de desestabilización enquistada.

Está por ver la acción de alivio que, sobre toda esta crisis, puedan tener los acuerdos de paz israelo-palestinos. De confirmarse éstos, con pruebas verificables a medio plazo en la difícil convivencialidad de Gaza y Cisjordania, su influencia positivista reforzaría una respuesta de mayor entereza en la sociedad egipcia, que debe mostrarse, por separado, de las labores represivas del régimen de Hosni Mubarak hacia el fanatismo integrista.

El mantenimiento de la estabilidad en la línea Rabat-Argel-Túnez-El Cairo, va a revelarse, en estos meses próximos, como algo absolutamente prioritario para Sureuropa.

Egipto está conociendo hoy una crispación social parecida a la que padeció Argelia en el trienio 1988-1990, aunque sin la materialización del número de víctimas habidas en aquellos trágicos sucesos. Pero no cabe la menor duda de que los plazos de supervivencia para el régimen del presidente Hosni Mubarak se están acortando, y Europa no puede permanecer impávida ante la debilidad de un sistema interconectado con la seguridad magrebí en su globalidad: las relaciones sociolaborales con Libia (con un millón de trabajadores egipcios en la Tripolitania), y la interconexión operativa de los radicalismos islamistas egipcio y argelino, a los que suministra su sostén ofensivo el Sudán integrista, dibujan un perfil de la crisis tan sutil como perdido.

De la misma manera que Argel y El Cairo están componiendo dificultosamente un eje antifundamentalista, y generan las movilizaciones adecuadas a este fin, así igualmente deberá actuar Europa, dirigiendo simultáneamente hacia Argelia y Egipto el caudal no sólo de sus aportaciones económicas —siempre débiles, siempre tardías—, sino el conocimiento de una realidad estratégica que recibe los mismos peligros, sufre idénticos daños y de la que participa su estrategia inestable al acumular nuevos riesgos.

Redefinición del concepto de seguridad. Pactos de defensa bilaterales. Multilateralidad del sentido defensivo e internacionalización del mismo

Una nueva idea de la seguridad debe establecerse entre las naciones europeas y norteafricanas.

La fundación de pactos mutuos de defensa se percibe todavía como algo «problemático» por ambas partes, pero si se reconocen las ventajas obvias de desprenderse de esa visión limitada del asunto. La suspicacia es mutua en las dos vertientes, aunque si fuera preciso matizar, es más acusada todavía en el lado magrebí que en el sureuropeo.

No se insistirá nunca lo bastante en afirmar lo siguiente: la relación interejércitos, sureuropeos y magrebíes, reforzará sólidamente no sólo la disposición del equilibrio mediterráneo, sino el entendimiento de una nueva adecuación geohistórica, en la que las fuerzas en presencia, sureuropeas y magrebíes, necesitan autodefinirse como «aliadas» frente a las crisis futuras que provengan de los espacios centroeuropeos o asiáticos.

Por medio del diálogo interejércitos, las políticas respectivas de ambas orillas se aproximarán consecuentemente.

Hoy por hoy, el lenguaje militar internacional es bastante más sincero y efectivo que el complejo recorrido que efectúa la política tradicional en los debates supranacionales. Su efectividad y positivismo en el reconocimiento de nuevos horizontes sociales y políticos puede resultar decisiva.

Baste recordar los beneficios de todo tipo que se derivaron para el advenimiento de una España democrática a través de las relaciones entre las Fuerzas Armadas españolas y la OTAN.

Desde estas perspectivas, pero enlazadas también con la problemática económica, en Europa cobra forma progresivamente esta ecuación, que sostenemos rigurosamente: a toda ayuda financiera y política debe corresponder no sólo una óptima distribución de la misma en las sociedades necesitadas de ella, sino una clara reorientación presupuestaria en los sistemas

de gobierno que reciben esa cooperación auxiliadora. La fórmula sintetizada desde la perspectiva europea de ayuda al Magreb podría ser la siguiente: menos armas por más dinero. Pero que debería ampliarse en esta otra definición magrebí hacia Europa: más trabajo por más seguridad.

Esa nueva definición de las urgencias sociales del Magreb y de las inquietudes estratégicas de Sureuropa, precisará de un recorte drástico en los gastos de defensa de esos países, en la actualidad situados entre cuatro y hasta seis puntos por encima al promedio superior de las naciones sureuropeas, que no suelen sobrepasar el 2 % de su PIB, y que, en el caso concreto de España, se sitúan en el 1,2 %. En justa reciprocidad, una parte importante de los presupuestos de Defensa sureuropeos debería reinvertirse en la constitución de planes agroindustriales fiables en el Magreb.

Con esta prueba específica no sólo de amistad, sino de inteligencia histórica, se podrá facilitar el trasvase hacia el Sur de fondos económicos pero, lo que es más importante, de toda una praxis de comprensión hacia aquellas naciones norteafricanas que demuestren hacerse acreedoras al desvío de los viejos prejuicios históricos. Sólo entonces será posible establecer los plazos fijos para un desarme consensuado y generalizado de ambas orillas mediterráneas.

España inició esa dinámica con Marruecos, mantiene posiciones afines pero de muy inferior nivel con Mauritania, y debe ampliar decididamente esa acción hacia Argelia y Túnez, pudiéndose, así mismo, reforzar los pactos defensivos con el otro extremo de la fachada norteafricana, Egipto.

Es más, puede ser que haya llegado el momento intelectual para que un país como España, despojado de viejos atavismos, y rejuvenecido en el conocimiento de la historia de su tiempo, pueda aceptar, en un futuro a medio plazo y en sus Fuerzas Armadas, contingentes reducidos de voluntarios magrebíes, especialmente rifeños y yebalíes. En el horizonte de una paulatina profesionalización del Ejército, que tiende hacia el voluntariado como forma idónea de su ser —y como práctica conductual aliviadora de innecesarias tensiones sociales—, esa convivencialidad hispano-magrebí demostrará su valía.

La experiencia histórica ha demostrado, convicentemente, la lealtad de esos hombres, su valor ante el fuego, y su función ejemplar como transmisores sociales en su país de origen de la naturaleza democrática del ser europeo. Ellos podrían formar, junto con los efectivos españoles, una nueva categoría de soldados, dispuestos a defender el orden y la paz internacionales en todo el mundo. Esa internacionalización del honor militar y de la seguridad regio-

nal podría tener su legitimación histórica más efectiva en la fusión castrense de ser europeos y magrebíes.

El concepto de ejército en las democracias y su aplicación específica en el mantenimiento de la paz global, se enfrenta a una nueva categorización. Si a la desaparición radical de la bipolaridad ha sucedido una multipolaridad, también definida como liderazgo global, el uso y reclutamiento de las fuerzas que defiendan la nueva realidad internacional queda inexcusablemente afectado por la envergadura de esos cambios.

La colaboración interejércitos, que se da no sólo en las organizaciones militares afines, sino en el ámbito de la estructura de vigilancia de la paz universal que pretende realizar la Organización de Naciones Unidas, obliga a una distribución plural de esos efectivos y a un entrenamiento no menos diverso de los mismos. Nada tiene de extraño, pues, que si esas unidades están empeñadas en una misma función, desarrollen técnicas de convivencia e instrucción análogas a ese cometido. Se lograría así componer una verdadera multilateralidad de la defensa, una decisiva y sin duda histórica revalorización del hombre militar en la perspectiva de nuestro tiempo y en la política que lo define.

El Magreb político como «idea en suspensión».

Límites y expectativas de reorientación de la crisis

El Magreb, como conjunto intersocial, y como idea de concordia interregional permanece en crisis. Las expectativas unionistas de hace cinco años —con el Tratado de Marrakech de 1989—, ideario que se considera la imprescindible, conocen un descrédito popular y un desánimo intelectual generalizados. Esa voluntad se reconoce hoy en día como «necesaria» solamente. El ilusionismo socio-político del Gran Magreb ha menguado drásticamente.

La respuesta sólo es una: no hay líderes, no hay ideas, no hay ejemplaridad gubernamental. Y sin la institución de una nueva fe sociorreligiosa y, por ende, política, que imponga y acepte los sacrificios nacionales imprescriptibles, será imposible el sostenimiento de una avenida de edificios gubernamentales que pertenecen a otras épocas, a otros mandamientos históricos.

En oposición, el avance de los radicalismos en la congregación islámica norteafricana se ha contenido en cuanto a su credibilidad social y, en algunas áreas concretas de Argelia —Kabyliya, Oranesado, Sáhara— está en discreta recesión.

Mientras, Egipto, que se encuentra dos años por detrás de la elipse involucionista argelina, conoce aceleradamente una implicación rigurosa de sus

Fuerzas Armadas en la represión del terrorismo integrista, pero, al igual que en Argelia, la reacción positivista de la sociedad sigue siendo escasa. Se hace evidente la falta de una dirección intelectual rigurosa y audaz ante el conflicto, dado que el Gobierno del presidente Hosni Mubarak continúa sin articular una doctrina social y política convincente, y la crisis pueblo-régimen se agudiza progresivamente en el Alto Egipto (6).

La exhibición de estos desajustes y la posibilidad de reducirlos, mantiene a la mentalidad sureuropea en un peligroso paréntesis incapacitante. Se aguarda una «clarificación» de los ímpetus reformistas institucionales magrebíes, y signos no menos claros de la derrota militar de los extremismos. Pero actuando así también se arriesga la extenuación de los ánimos democratizadores de sociedades como la argelina, la tunecina o la marroquí, y resulta evidente que Egipto, en su dimensión socio-institucional, lleva ya tres años ejerciendo un funambulismo de Estado tan arriesgado como impropio.

El espacio político magrebí, siempre dinámico, siempre diverso, conoce un gran cansancio, que se traduce en un abatimiento de las confianzas institucionales en sus propios programas de gobierno y en la movilización de la ilusión popular, cuya recuperación parece no poder desprenderse de lo utópico.

El Magreb vive, por añadidura, bajo una carencia crónica que se arrastra desde los fondos históricos del alauísmo y el colonialismo hispano-francés: la no constitución de una identidad personal, una voluntad renovadora profunda, una nueva religión, una nueva forma de ser social e incluso teológica y, por tanto, política.

El Magreb, efectivamente, tiene hambre de política, al ser exponente de una suma de pueblos imaginativos y de gran riqueza cultural. Ante la carencia de ese vigor proyectual en los discursos de Estado recurre entonces a una protesta airada contra esas incapacidades institucionales: el integrismo islámico, prueba de su gravísima desesperación moral y del fracaso vergonzoso de los viejos modales de gobierno.

Los regímenes magrebíes siguen sin reaccionar, sin acertar a componer una respuesta particular a las particularidades que demandan sus pueblos. Y Sureuropa no logra vertebrar una contestación, una réplica institucional —pues lo popular es casi tarea imposible a estas alturas de las crisis—, que reoriente una dinámica de acercamiento intersocial euroafricana.

Se consiente o se deja a merced del azar la inspección mesurada de los riesgos propios y ajenos. Esta corriente antiestratégica, derrotista, coge

(6) BUCCIANI, ALEXANDRE, «Misère et islamisme en Haute-Egypte», en *Le Monde*, 18 de agosto, 1993.

empuje a ambos lados mediterráneos, y provoca una generalización de conductas políticas que tienden, acusadamente, hacia la pasividad.

Se vive, virtualmente, un mismo fatalismo socio-político y gubernamental a ambos lados del Mediterráneo. Más realista (o más impotente) en la vertiente europea, y más insincero (o más suicida) en la margen africana, aunque ello no sea óbice para que allí se reconozca la tremenda precaridad de una situación institucional tan deteriorada que a menudo es ejemplo pasmoso de supervivencia.

Sin embargo, es esta la hora de reinvertir esa negatividad. Es preciso ejecutar una apuesta racionalizada por una nueva confianza intramediterránea y euromagrebí, sin falsas grandilocuencias ni quijotescos optimismos. España tiene en ese terreno que cumplir con una tarea ciertamente decisoria para su propia suerte geoestratégica. Salvar el descalabro del Magreb es, en gran medida, evitar el pesimismo ontológico de España. Una acción que debe ampliarse y continuarse en nuestra ensambladura con Portugal.

Esa dinámica promediterránea y euroatlántica debe ir de consumo con Francia, y en lo concerniente al área magrebí, ambas políticas sureuropeas deben —y pueden— coliderar el reformismo comunitario que impone el momento crítico actual. La disyuntiva es ésta: hacerlo en el año 1994 o no conseguirlo jamás.

Esas acciones deberían realizarse no exclusivamente en el marco de una potenciación de la PMR, sino en la reestructuración de toda la política mediterránea europea, y actuando, de común acuerdo, con Estados Unidos.

Incluso Rusia, que tratará, en la más prudente prospectiva geoestratégica, de compensar el desprendimiento de Ucrania de su ser geopolítico —con el cierre forzoso a sus salidas meridionales históricas—, podría participar todavía, y decisivamente, en la configuración de un marco de equilibrio euromediterráneo, en el que se apoyaría después, necesariamente, para compensar su progresiva inferioridad ante Alemania y el pangermanismo geopolítico que crece desde Lituania a Croacia.

En el ámbito sindical, empresarial e institucional, el Magreb responde incuestionablemente siempre lo mismo a la pregunta sureuropea de que pueda hacerse para ayudarles: libertad de comercio. Se sabe perfectamente que esa medida, sino imposible, al menos es generadora de una reacción adversa en los medios productivos, sindicales y empresariales de Sureuropa. Una generosa liberación comercial sureuropea no sobreviviría más allá de dos semanas. Francia y España conocerían graves revueltas agrarias ante una entrada desordenada de productos agrícolas magrebíes, máxime cuando

esa crispación es ya una vieja experiencia, e incluso las tensiones intercomunitarias al respecto son penosamente elocuentes.

La solución, sin ser total (prácticamente nada puede serlo en circunstancias tan críticas como las actuales), puede que estribe no en liberalizar, sino adónde dirigir ese liberalismo. La CE podría financiar importantes contingentes agrícolas magrebíes que luego encauzaría hacia países con graves carencias alimenticias, especialmente en el área eslavo-caucásica. No es ninguna panacea, ni tampoco una solución final, pero al menos aliviaría, durante dos-tres años, como poco, las demandas exportadoras del Magreb. Después, desde ese plazo temporal recuperado, hay que buscar otras alternativas menos circunstanciales, si es que pudieramos calificar así al caos ruso o asiático-central.

La política magrebí no puede aceptar, como realismo imperativo, que Europa actúe hacia ella con modales periclitados. Los sureuropeos no podemos ser el nuevo Estado-Providencia, que sustituya al benyedismo, el burguibismo o al expansivo alauismo de los años setenta. El Magreb debería iniciar una reflexión socrática, y desde esa percepción del conócete a ti mismo, reconocer la sabiduría del ayúdate y te ayudaré.

El Magreb, desvertebrado, y sin expectativas racionales de lo contrario, es hoy, más que nunca, una idea en suspensión. Pero conviene añadir, inmediatamente, que no hay nada «definitivo» en esa verificación, por lo que no cabe situarse, en consecuencia, en términos de patetismo estratégico.

Estimamos que es beneficioso, incluso, que no haya surgido ese Magreb de la UMA, una ficción política que sólo respondía a meros intereses institucionales de supervivencia. El Magreb no puede ser una Santa Alianza de regímenes dieciochescos trasplantados a una realidad socio-política fragmentada y opuesta a esos ofensivos modales cortesanos. Tan alejados de la objetividad y de la prudencia estratégica estaban la Francia de Luis XVIII o Carlos X como la Argelia de Benyedid o el Marruecos de Hassan II.

Ahora bien, existen dos Magreb, y posiblemente muchos más. Quiere decir esto que si la sociedad va por un lado y las instituciones por otro —algo que también es común en la desconcertada Europa emergida del sueño desarrollista—, eso no facilita ni las utopías ni los saltos en el vacío. En la hora presente, y si tomamos como ejemplo al Marruecos alauí, donde todavía gobierna al hassanismo, se debería, por el propio sistema alauí, a imaginar soluciones a las realizadas por la Francia de Luis Felipe, el creador de la moderna burguesía, con la cual fue posible el triunfo de los moderados tras el estallido revolucionario del año 1830.

Pero Luis Felipe acabó siendo derrocado en el año 1848, y sustituido por un imperialista imprudente, como lo fue Napoleón III, luego volvió a repetirse el ciclo de los estrabismos ideológicos y el lento y doloroso retorno a la moderación, que certificó, parcialmente, la III República de Favre y Clemenceau.

Queremos significar con ello que si el progresismo real de Hassan II quiere hacerse tan real como progresista, apenas dispone de plazos. Y cualquiera de sus hijos y príncipes estará exactamente tan falto de tiempo estratégico como lo está hoy su padre y soberano si no se invierte el hábito a dejar que los asuntos de Estado se resuelvan por sí solos. Aunque el alauísmo está acostumbrado a vivir en el límite, esa postura ni es política ni es un contrato sellado con la lógica.

El Magreb, como la Europa aturdida tras la quiebra del Estado de bienestar, va a conocer una rápida y dramática pérdida de la paciencia. Los años de bonanza, que fueron reales para ambas vertientes entre los años 1984 y 1990 no fueron aprovechados. Todavía hay margen de maniobra, pero cada semana que pasa y se desaprovecha es una paletada que ensucia la inteligencia de la política magrebí. Y es una acción que afecta también negativamente a Sureuropa, reflejo perenne del espejo magrebí, y tan frágil como éste.

La especificidad socio-política de Argelia y Marruecos

El Magreb es una estructura que se sujeta en dos columnas: Argelia y Marruecos. Cualquier suceso que afecta a su verticalidad se traslada inevitable y espontáneamente al resto del conjunto. No hay que hacer ningún exagerado ejercicio de previsión geopolítica si, al constatar que una de esas estructuras se encuentra en equilibrio inestable (Argelia) y se diese el caso de una secuencia de grietas socio-políticas en su pareja soporte (Marruecos), toda esa masa geopolítica se vendría abajo. El suceso no sería previsiblemente rápido, pero tampoco se delataría en el tiempo, una vez que Argelia hubiese conocido la descoyuntamiento.

Aceptada la desarticulación argelina por el diletantismo europeo, lo que preocupa es si esas energías negativas van a fructificar en los campos marroquíes y cuales podrían ser la cuantía de esos daños. Posiblemente, y para la perspectiva de la Europa diplomática, habituada al alauísmo, fuesen más lesivos entonces los temores por el propio desconocimiento a lo que podría suceder en un Marruecos sin la dinastía alauí, que a la realidad escueta de esa carencia política.

Por simple respeto a la ley biológica y a la dinámica de los cambios sociales, Marruecos se aproxima, casi metro a metro a ese precipicio temible de lo imprevisto.

Todo lo que suponga entregar las riendas políticas de Marruecos a instituciones políticas y no a patrimonios familiares una garantía, que no por menos relativa deja de ser una salida honorable y consecuente. No es menos cierto que los resultados de las elecciones legislativas del 25 de junio del año 1993, con el desmantelamiento de los partidos palatinos —como la Unión Constitucional, creada en el año 1993 por el influyente consejero real Reda Guedira y el ex primer ministro Maati Buabid, o la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI), que lidera el cuñado del monarca alauí, Ahmed Osman, formaciones que han perdido dos tercios de sus diputados—, y la aparición, por vez primera, de dos parlamentarias, Fátima Bennani, del nacionalismo istiqlalí, y Badia Skali, del obligadamente devaluado socialismo histórico marroquí Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), parecían cambios transcendentales que facilitarían un discreto acceso hacia la confianza. La segunda vuelta de esas elecciones, en septiembre del año 1993, han relativizado drásticamente aquellas esperanzas, al convertirlas en meras hipótesis.

Todo esto indica, so pena de un dudoso reforzamiento ideológico-popular posterior, que desplazase hacia la USFP la solidaridad nacional y la confianza dinástica —que ya es suficiente experimento metafísico—, que la conjunción nacionalismo-socialismo-patrimonialismo (por los partidos del ámbito familiar real), conduce hacia un «nuevo» alauísmo, que ni es sincero ni es nuevo. A ello se añade la raíz xenófoba recurrente del Istiqlal que lidera Ahmed Bucettá, quien nada más conocerse los resultados de junio del año 1993 volvió a hablar de «los territorios todavía no liberados del reino», en alusión a Ceuta y Melilla.

La clave residirá en por cuánto tiempo de más podrá el rey Hassan II controlar así el poder, y cómo encarará la sociedad marroquí el alejamiento de una reforma política, viejo clamor tantas veces encarcelado.

En lo que concierne a España, y pese a nuestro colonialismo en el Norte —que para sí quisieran muchos marroquíes—, las relaciones son amistosas a nivel de gobierno, y claramente afectivas a nivel intelectual o individual. España no debe olvidar esa plataforma positivista de la que siempre parte en su relación con Marruecos y los marroquíes. Aparte quedan las cíclicas denuncias nacionalistas. Pero no es prudente tampoco estimar esas acciones como meras rabiets de partido: el problema de Ceuta y Melilla no debe ser, precisamente, ningún problema, ni para Marruecos ni para España. En pie queda la inteligencia respectiva de entenderlo así.

En cuanto a Argelia, el anuncio, realizado en junio del año 1993, para la celebración de un referéndum de reforma constitucional a finales de ese

mismo año, no ha despejado ninguno de los interrogantes políticos e, incluso, ha añadido bastantes más. Hay que reconocer, objetivamente, las gigantescas dificultades que afronta el régimen de Ali Kafi, que el nuevo Gobierno Malek ha heredado. Argelia está en guerra, y con eso queda dicho todo.

Se trata de un formidable choque de inercias socio-políticas más que de ideologías, pues el fundamentalismo se configura, como ya dijo en su momento Berque, como un regresionismo fasticizante de la propia idea de tolerancia coránica. Y si el socialismo popular y anticorrumpo del nuevo Estado no logra reunir en torno a sí las amistades políticas (la percepción del riesgo de fragmentación regional y social) de los demás partidos, ni el reformismo sería viable ni la paz nacional podría alcanzarse.

Argelia tiene que resistir, pero ¿cuánto y cómo? Si el Gobierno Malek introduce las necesarias reformas y hace extensible al arco patriótico nacional —desde los beréberes de la Kabylia a las asociaciones feministas— la corresponsabilidad en la tarea de supervivencia que se debate, Argelia sobrevivirá, y con ella no el Magreb que conocemos, sino el Magreb renovado que merece surgir de esta durísima lucha. Si esos plazos se alargan todavía más y el derecho legítimo a responder policialmente ante los ataques integristas termina por justificar una dictadura cesariana o simplemente corporativa, ni se habrá alcanzado la seguridad para el país ni ese Estado gozará de legitimación alguna. Su soledad sería terrible y de ella participaría también Europa antes de asistir a su desaparición.

Conviene precisar lo siguiente: consentir el hundimiento de Argelia como sistema de libertades, tanto desde el poder en Argel, como en la mera posición de Europa como testigo del drama, impondría una secuencia negativista en toda la fachada norteafricana, originándose un corte radical en las comunicaciones sociales y diplomáticas entre las dos orillas mediterráneas, con reacciones en cadena de oscurecimiento o aislamiento para el África Subsahariana. No podemos consentir un retorno a los silencios vándalos del siglo V, que ya denunciara Pirenne (7). El integrismo islámico puede ser derrotado, pero exige una sabia mezcla de firmeza estatal y de honesto reparto del poder.

El asedio de la Argelia posbudiafista es también el asedio de una Europa confiada en los mandamientos socio-políticos de un tiempo estratégico que

(7) PIRENNE, HENRI, *Mahoma y Carlomagno*. Versión española de Esther Benítez, sobre la edición francesa de 1970 (el manuscrito del insigne profesor belga data de 1935). Alianza Editorial, Madrid 1979, p. 229.

ya no volverá. Por eso, si Argelia disputa tenazmente su derecho a ser, como Estado y como voluntad de convivencia, Europa participa también de esa batalla, y eso obliga a desprendernos de toda imaginación no renovadora de nuestra propia conciencia política, de todo lo que no suponga el deber histórico de afrontar la realidad que nos corresponde, y el derecho a hacer de ella un espacio de libertades y de progreso.